



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

D. ALFONSO RAMOS DE MOLINS SÁINZ DE BARANDA, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 17 de febrero de 2005, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el que se aprueba la:

RESOLUCIÓN RELATIVA AL CAMBIO DE SEDE DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

I. ANTECEDENTES.

Con fecha 26 de enero de 2005 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 2397/2004, de 30 diciembre, por el que se regulan determinados aspectos organizativos en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La disposición adicional única establece que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, organismo público de los previstos en el apartado primero de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril (LOFAGE), pasa a tener su sede en Barcelona, añadiendo que la propia Comisión, en el ámbito de sus competencias, adoptará mediante Acuerdo las medidas necesarias para que el cambio de sede se produzca a lo largo del año 2005.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones está dotada de un especial estatuto de independencia y autonomía, confirmado por las sucesivas Leyes Generales de Telecomunicaciones, similar al de otros organismos de regulación de las telecomunicaciones de la Unión Europea (UE).

La Comisión, que se creó por el Real Decreto Ley 6/1996, de 7 de junio, de Liberalización de las Telecomunicaciones, tiene una regulación específica constituida principalmente por el artículo 48 de la Ley 32/2004, de 3 noviembre, General de Telecomunicaciones, por el Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión y por su Reglamento de Régimen Interior. La disposición adicional décima de la LOFAGE prevé



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

que la Comisión se regirá por lo establecido en su legislación específica y sólo supletoriamente por lo establecido en su articulado, añadiendo que “se regirá por su normativa específica para hacer plenamente efectiva dicha independencia y autonomía.”

La independencia de la Comisión se manifiesta en diversos aspectos presentes en la Ley 32/2003 y su Reglamento correspondiente: en primer lugar, goza de autonomía funcional en el ejercicio de sus competencias; es decir, los actos emanados de la Comisión en el ejercicio de sus potestades públicas en materia de telecomunicaciones agotan la vía administrativa no pudiendo sus decisiones ser revocadas por la Administración (art. 48.17 Ley 32/2003); el Presidente, Vicepresidente y Consejeros de la Comisión son nombrados por el Gobierno para un mandato de 6 años, debiendo el Ministro de Industria, en el caso de los primeros, comparecer ante una comisión parlamentaria para informar de las personas que se propone nombrar, y se sujeta su separación a causas legalmente tasadas; la Comisión tiene, además, potestad normativa, que ejerce a través de instrucciones vinculantes para los operadores en el sector que adoptan la forma de circulares.

En segundo lugar, dicha independencia funcional se refuerza en la Ley con la atribución de autonomía organizativa y financiera. Así, el artículo 48.10 de la Ley 32/2003, atribuye a la Comisión la potestad de autoorganización. Esta disposición confiere al Consejo de la CMT la competencia exclusiva para aprobar su propio Reglamento de Régimen Interior que regula la actuación de los órganos de ésta, el procedimiento a seguir para la adopción de acuerdos y la organización de personal. En este sentido, la independencia de que goza la Comisión abarca las decisiones sobre política organizativa y de personal, la determinación del modelo organizativo y su estructura funcional, lo que supone la atribución de un status jurídico especial, cuyo principal objetivo es la garantía de imparcialidad y neutralidad en la ejecución de sus funciones.

SEGUNDO.- El paquete de Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo aprobadas a lo largo de 2002 establece un nuevo marco regulador de los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, una de cuyas finalidades es alcanzar el objetivo establecido por el Consejo Europeo de Lisboa de crear las condiciones para el desarrollo en la Unión de una economía digital y basada en el conocimiento. Esta es una de las variables esenciales para que Europa crezca, cree puestos de trabajo e incremente el binomio competitividad-productividad en un entorno globalizado. En este contexto, la Directiva 2002/21/CE, relativa a un marco regulador común de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, concede una singular relevancia a las Autoridades Nacionales Regulatorias, la CMT en el caso español, que se convierten en un instrumento decisivo para lograr las metas trazadas en Lisboa y convertirlas en un factor estratégico para el futuro de la economía europea y, por ende, de la española.

Desde esta perspectiva, la UE considera fundamental la independencia de los organismos reguladores, tanto de los operadores como del poder político. Así lo refleja el considerando 11 de la directiva 2002/21 al afirmar que: “De conformidad con el principio de separación de las funciones de regulación y de explotación, los Estados miembros deben garantizar la independencia de la autoridad o autoridades nacionales de reglamentación con el fin de asegurar la imparcialidad de sus decisiones. (...) Las autoridades nacionales de reglamentación deben disponer de todos los recursos necesarios en cuanto a personal, competencia y medios financieros para el cumplimiento de sus misiones”, y el artículo 3.2 de la misma directiva que prevé que los “Estados miembros garantizarán la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación, velando porque sean jurídicamente distintas y funcionalmente independientes



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

de todas las entidades suministradoras de redes, equipos o servicios de comunicaciones electrónicas..”. El apartado 3 del mismo artículo establece que los Estados “velarán por que las autoridades de reglamentación ejerzan sus competencias con imparcialidad y transparencia”.

La exigencia de independencia, según la normativa europea, se traduce en dos elementos básicos: primero, la autonomía jurídica de los organismos reguladores; segundo, la autonomía funcional. Una y otra constituyen la cara y la cruz de una misma moneda; esto es, la configuración de organismos realmente independientes capaces de desarrollar su actividad, sin interferencias exógenas que pongan en peligro la misión para la que fueron creados. La aplicación del nuevo marco normativo europeo, mucho más flexible que el anterior, se apoya en la capacidad de las Autoridades Reguladoras para aplicar las nuevas reglas. Si bien es cierto que, en las primeras fases del proceso de liberalización de las telecomunicaciones en Europa, el carácter independiente del organismo regulador se predicaba respecto de los operadores del mercado, no es menos cierto que el nuevo marco vincula la exigencia de independencia a la necesidad de asegurar la imparcialidad y transparencia en la toma de sus decisiones. La Directiva marco se ha preocupado de extremar las demandas de independencia, no sólo para que ésta resulte real en la práctica, sino también para que sea percibida como tal por la opinión pública, por los operadores, por el mercado y por el conjunto de los agentes económicos. Este hecho define el fondo y la forma, la filosofía central de la Directiva marco de 7 de marzo de 2002, cuando establece que las Autoridades Nacionales de Reglamentación, “deben disponer de todos los recursos necesarios en cuanto a personal, competencia y medios financieros para el cumplimiento de sus misiones”.

TERCERO.- El escenario creado por el paquete de directivas europeas, y en particular por la Directiva 2002/21, tiene una importancia capital ya que va a afectar al marco dentro del cual se va a desplegar la actividad del sector durante los próximos años. El nuevo régimen de regulación europeo gira en torno un sistema basado en los principios de defensa de la competencia, que exige el análisis de los mercados y de su situación competitiva cada dos años, con carácter previo a la imposición por parte de la ANR de obligaciones específicas a los operadores, que previamente hayan sido declarados con poder significativo de mercado. Dicha imposición, supresión o modificación se realizará, caso por caso, en función de las necesidades del mercado y de forma temporal, lo que dota al marco regulatorio de una capacidad de adaptación a la evolución del mercado.

El proceso de definición de los mercados de referencia iniciado por la CMT es un primer e imprescindible paso para ajustar la normativa española al nuevo marco regulador. Esta actividad goza de una extraordinaria complejidad, ya que se trata de transitar de un mundo conocido y contrastado, la transición del régimen de monopolio al de plena competencia, a otro escenario, dinámico y cuajado de incertidumbres. Por tanto, la realización del análisis completo de los mercados de referencia, como la implantación el nuevo marco regulatorio, exige un clima de serenidad y estabilidad sin el cual se corre el riesgo de dificultar de modo extraordinario la ejecución de ambas tareas. Desde esta perspectiva, cualquier cambio que deteriore la funcionalidad de la CMT, deberá ser acometido con criterios de extraordinaria prudencia.

CUARTO.- La actividad regular de la CMT y la extraordinaria derivada de los cambios que es imprescindible introducir en el marco regulador español aconsejan reforzar el capital humano cuya formación y experiencia constituye un activo insustituible en el horizonte del corto y medio plazos. Las singularidades de la acción reguladora y la complejidad del sector se antojan



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

incompatibles con cualesquiera mermas a la eficiencia del organismo regulador en el cumplimiento de sus funciones, en un momento de modificación radical del entorno regulatorio. En las actuales circunstancias, que se produzca una fuga del capital humano de la CMT comprometería de manera clara su capacidad, de la cual va a depender en buena medida la evolución del mercado y del sector durante los próximos años. Desde esta óptica, la responsabilidad aconseja minimizar los riesgos derivados de una descapitalización humana de la Comisión.

QUINTO.- Son principios esenciales establecidos en la Directiva 2002/21/CE, la coordinación y constante comunicación entre las ANR,s y los órganos de defensa de la competencia en cada Estado miembro, la existencia de vías de recurso contra las decisiones de las mismas y la transparencia en sus relaciones con los operadores, dando a éstos la oportunidad siempre de formular adecuadamente sus observaciones acerca de la/s medida/s a adoptar.

En lo que a la CMT se refiere, ello se traduce en primer lugar la necesidad esencial, consagrada ya como realidad en los años transcurridos, del mantenimiento constante de un contacto (más allá del puramente procedimental) con los agentes interesados en el mercado, garantizando así el conocimiento en tiempo real de las distorsiones y funcionamiento de los mercados que regula y los intereses y objetivos de los que traen causa las solicitudes que se le someten.

En segundo lugar, una relación, también permanente y fluida, con las demás autoridades que, de un modo u otro, concurren con sus decisiones a la regulación de las actividades cuya salvaguarda tiene encomendada la CMT o de aquéllas que, por su conexión con éstas, inciden sobre el ámbito regulado. Las autoridades de defensa de la competencia y la Administración activa son así interlocutoras constantes de la CMT para el desempeño de sus funciones.

Por último, las instancias revisoras de sus decisiones requieren igualmente del seguimiento permanente y cercano de la marcha de los recursos interpuestos.

Este conjunto de relaciones constituyen así la columna vertebral de la eficacia del funcionamiento de la Institución, la cual quedaría gravemente comprometida, si no imposibilitada, en el caso de que las condiciones de funcionamiento de la CMT dificultaran su fluidez.

Ello implica, teniendo en cuenta la realidad actual de la presencia de todos los agentes descritos, operadores, Administración, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, la necesidad inexcusable de que se mantengan operativas en Madrid las dependencias de la CMT necesarias para garantizar dicha fluidez de la relación con aquellos órganos y agentes con los que los Servicios de esta Comisión deben interactuar de forma cotidiana en el ejercicio de sus funciones.

En virtud de las consideraciones de Hecho y de Derecho expuestas, esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,

RESUELVE

PRIMERO. El Consejo acuerda iniciar en esta fecha el procedimiento derivado de la entrada en vigor del Real Decreto 2387, de 30 de diciembre.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

SEGUNDO.- El desarrollo de dicho procedimiento se llevará a cabo mediante Acuerdos adoptados por el Consejo a iniciativa del Presidente de la Comisión relacionados con:

- a) Determinación del calendario y actuaciones a realizar
- b) Modelo de organización y relación de puestos de trabajo

TERCERO.- Todas las actuaciones que requieran movimiento de personal serán voluntarias e incentivadas.

CUARTO.- Las propuestas de acuerdos se presentarán al Consejo en el plazo de dos meses, a partir de la presente Resolución.

QUINTO.- Se mantendrán operativas en Madrid las dependencias de la CMT necesarias para garantizar la fluidez de la relación con aquellos órganos y agentes con los que los Servicios de esta Comisión deben interactuar de forma cotidiana en el ejercicio de sus funciones.

SEXTO.- Se habilita al Secretario para iniciar las gestiones necesarias para dotar a la Sede de la CMT de los recursos materiales y en particular las dependencias necesarias que, con un adecuado carácter representativo, permitan la operatividad de dicha sede dentro del presente ejercicio.

SEPTIMO.- Estos Acuerdos y cuantos sean sucesivamente adoptados por el Consejo en relación a este asunto serán comunicados de inmediato a todo el personal de la Comisión.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del acta de la sesión correspondiente.

EL SECRETARIO,

Vº. Bº. EL PRESIDENTE,

Alfonso Ramos de Molins Sáinz de Baranda.

Carlos Bustelo García del Real